

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 18° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-8539-2023
CARATULADO : ESCOBAR/FISCO DE CHILE-CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE

Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco

VISTOS:

A folio 1, don Nicolás Alberto Leal y don Eduardo Armando García Ramos, abogados en representación de don **PEDRO NOLASCO ESCOBAR GUTIERREZ**, pensionado, cédula de identidad N° 6.044.377-7, todos domiciliadas para estos efectos en Bandera N° 236, subterráneo, comuna de Santiago, deducen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, en contra del Fisco de Chile, representado – en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago.

Funda la demanda en base al relato en primera persona de don **Pedro Nolasco Escobar Gutierrez** con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura, Valech I, N° 7.803, el cual pasa a transcribirse a continuación: “*Mi nombre es Pedro Nolasco Escobar Gutiérrez, tengo 72 años y vivo en la comuna de Quillón.*

En el año 1973 mi vida fue destruida. En aquel entonces vivía junto a mi pareja e hija y era estudiante de la Universidad Técnica del Estado. Tenía grandes metas y objetivos, sin embargo, el 12 de septiembre las cosas cambiaron. Militares fueron a mi universidad y me llevaron detenido al Estadio Chile. Una vez en el lugar me golpearon salvajemente, me pisaban y daban culatazos. Me preguntaban por armas desde el primer momento, porque no tenían nada más para acusarme, y ese era el falso motivo perfecto.



Foja: 1

El 22 de septiembre fui trasladado al Estadio Nacional, ahí me conducían al velódromo para ser maltratado, me atormentaban mostrándome a otros detenidos que estaban torturados y mutilados. Durante mi permanencia en el estadio fui interrogado en reiteradas ocasiones, me tuvieron sin alimentos y privado del sueño.

En el mes de noviembre me dejaron en libertad, después de haber permanecido alrededor de dos meses detenido. Me sentía débil, triste, frustrado y angustiado, estaba en constante alerta, con miedo, pendiente a mi alrededor. Mi vida nunca más fue la misma, me vi obligado a aislarme, fui estigmatizado por lo sucedido, ni siquiera pude seguir estudiando, opté por irme al sur.

Guardaba en mi interior una serie de traumas y sentimientos causados por lo que viví, comencé a beber alcohol y sufrí alteraciones en mi conducta y carácter. Además, no podía dormir y tenía pesadillas, me sentía aterrado.

El gran sufrimiento que provocó lo sucedido afectó a mi familia, mi esposa y yo terminamos separándonos. Es muy difícil para mí hablar de esto, nunca me ha dejado de doler, los recuerdos me atormentan, definitivamente es una marca que tendré para toda la vida.

Hoy en día vivo solo y persiste el insomnio, recorro a pastillas para poder conciliar el sueño. Me cuesta caminar, mi cuerpo se ha debilitado. Quedé traumatado y con temor permanente. Tengo la sensación de que me persiguen e investigan, me siento inseguro y tremendamente angustiado, ni siquiera puedo hablar bien sobre esto. No pierdo la esperanza de que se haga justicia y exista una reparación adecuada por el gran daño que me han hecho, acabaron con mi vida y destruyeron todo lo que tenía, hasta me separe de mi familia. Nunca he podido volver a ser feliz.” .

En cuanto al daño, refiere que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió en carne propia. Esto es indudablemente un daño moral, el cual, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización.

Concluye en mérito de las disposiciones legales y constitucionales que transcribe, solicitando tener por presentada demanda de indemnización de perjuicios



Foja: 1

por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del Fisco de Chile, ya individualizado y en definitiva se declare que el demandado debe pagar, la suma de \$200.000.000 por concepto de daño moral, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

A folio 10, doña Ruth Israel López, abogada procurador fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, contesta la demanda solicitando el rechazo de la misma en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

Opone excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado la demandante. Expresa que el Estado de Chile, en un esfuerzo por reparar el daño sufrido por víctimas de violaciones a los derechos humanos, ha efectuado una serie de esfuerzos tendientes a conceder la reparación del daño. Así la ley 19.123 y las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a las reparaciones mediante transferencias directas de dinero, menciona que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.



Foja: 1

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.- Afirma que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte

una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Respecto de las reparaciones específicas indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N^os 19.234 y 19.992 y sus modificaciones. La ley 19.992 y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que el actor recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo



Foja: 1

PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Finalmente, respecto de las reparaciones simbólicas, invoca una compensación satisfactiva mediante la construcción de memoriales, establecimiento de museos y obras afines.

Indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal” .

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que:

“DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y



Foja: 1

Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización.

Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos” .

A continuación, y en subsidio de la excepción de reparación integral, opone a la demanda la excepción de prescripción extintiva, esgrimiendo que con arreglo a



Foja: 1

lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por la demandante, las detenciones ilegales y torturas que sufrió tuvieron lugar desde el 12 de septiembre de 1973 y hasta por dos meses aproximadamente. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opongo la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de las acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil. Asimismo, indica que no existe normativa alguna que establezca que, en materia de Derechos Humanos, la acción derivada de un ilícito civil sea de carácter imprescriptible, citando al efecto jurisprudencia afín.

En subsidio de las defensas y excepciones precedente, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, toda vez que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Ha dicho la Excma. Corte Suprema: *“Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo*



Foja: 1

imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”.

En subsidio de lo anterior, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Finalmente alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, los que sólo pueden devengarse en el caso que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Concluye, solicitando tener por contestada la demanda civil, y en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

El Tribunal tuvo por contestada la demanda.

A folio 15, obra réplica del actor, quien ratifica lo expuesto en la demanda y refuta la defensa esgrimida por el Fisco de Chile.

A folio 18, rola dúplica de la parte demandada, quien reitera lo expuesto en la contestación del libelo.

Por tratarse de un Juicio de Hacienda, se prescindió del llamado a conciliación.

A folio 27, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la instrumental que rola en autos.

A folio 44, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

1°) Que, don Nicolás Alberto Leal y don Eduardo Armando García Ramos, abogados en representación de don **PEDRO NOLASCO ESCOBAR GUTIERREZ**, pensionado, cédula de identidad N° 6.044.377-7, todos domiciliadas para estos efectos en Bandera N° 236, subterráneo, comuna de Santiago, deducen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, en contra del Fisco de Chile, representado – en su calidad de Presidente



Foja: 1

del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago, conforme fundamentos de hechos y de derecho reseñados en la expositiva de esta sentencia, solicitando en definitiva se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$200.000.000, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos, con expresa condena en costas.

2°) Que, la parte demandada procede a contestar la demanda solicitando su total rechazo conforme excepciones y alegaciones ya expuestas.

3°) Que, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta, ello al tenor de lo preceptuado en el artículo 1698 del Código Civil.

4°) Que, a fin de acreditar sus dichos la parte demandante rindió prueba instrumental que se singulariza a continuación: Fallo de casación en Episodio “Comando Conjunto, víctimas: Salinas, Pacheco y Gianelli. Rol N° 5831-2013; Fallo de casación en Episodio “Torres de San Borja”, víctimas: Montecinos Slaughter, Adler Zulueta, Díaz Agüero, y otros. Rol N° 2918-2013; Fallo causa “Marcone con Fisco de Chile”, Rol 22856-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015; Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2018, en causa caratulada “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017; Sentencia de la Excm. Corte Suprema, Rol N° 1092-15, dictada el día 14 de septiembre de 2015; Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Reflexiones y Propuestas de S.E. el Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar; págs. 5 a la 10, inclusive; Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V; Copia de la página N° 150, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, que da cuenta de haberse acreditado por el Estado de Chile la calidad de torturado del demandante don **PEDRO NOLASCO ESCOBAR GUTIÉRREZ**, cédula de identidad número **6.044.377-7**, Registro de Torturados N.º **7803**; Informe del Programa de Asistencia Integral de Salud, PRAIS, del Ministerio de Salud, denominado Norma técnica para la atención de salud de personas afectadas



Foja: 1

por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990; Copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente al demandante principal de autos don PEDRO NOLASCO ESCOBAR GUTIÉRREZ, cédula identidad número 6.044.377-7, donde se acredita su calidad de víctima de violaciones de derechos humanos por parte del demandado de autos, Estado de Chile; Informe Psicológico sobre los efectos de la prisión política y tortura padecida por el demandante de autos, PEDRO NOLASCO ESCOBAR GUTIÉRREZ elaborado y suscrito por el Psicólogo Clínica de PRAIS, don Jennifer Arteaga Beltrán, del Servicio de Salud Ñuble, de fecha abril del 2024.

5°) Que, la parte demandada no rindió probanza alguna que ponderar, sin perjuicio de ello, obra a folio 17 copia de respuesta a oficio solicitado por ésta consistente en ORD DSGT N° 4792-16783 de fecha 05 de octubre de 2023, emitido por el Instituto de Previsión Social que da cuenta de los montos por reparación Leyes N° s 19.992 y 20.874 recibidos por la demandante.

6°) Que, el demandante ha comparecido a estrados invocando su calidad de víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, motivo por el cual reclama por esta vía el resarcimiento del daño que dicho episodio le ocasionó.

7°) Que, del mérito de lo expuesto en la fase de discusión de estos antecedentes y la copia de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas por la Comisión Valech acompañada por el actor, no objetada, se tiene por acreditado en autos que don Pedro Nolasco Escobar Gutiérrez es víctima de violación a los derechos humanos.

8°) Que, el Fisco de Chile opone excepción de prescripción extintiva de la acción civil indemnizatoria, fundado en que a pesar de encontrarse suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 16 de abril de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil, o en subsidio aquel contemplado en el artículo 2515 del mismo cuerpo legal.



Foja: 1

9°) Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que la detención ilegal de demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil.

10°) Que, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

11°) Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

12°) Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

13°) Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión



Foja: 1

de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

14°) Que a la luz de lo que se ha venido diciendo no cabe sino el rechazo la excepción de prescripción

15°) Que, finalmente el demandado deduce excepción reparación integral fundado en que el demandante ya ha sido indemnizado, ello en virtud de la dictación de la Ley N° 19.123 que dispuso la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la que se ha realizado a través de transferencias directas de dinero, asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas.

16°) Que con dicha alegación el Fisco reconoce, en el caso concreto, una necesidad de reparación y como consecuencia de ello un daño, el que esta sentenciadora entiende que corresponde al daño moral, esto es, toda afección que acarrea un agravio en las afecciones legítimas o de un derecho subjetivo inherente e inmaterial de una persona e imputable a la otra.

En el caso de autos, el perjuicio antes señalado se entiende corresponder al daño moral del actor el que hizo consistir en sufrimiento y angustia irrogada por las diversas vejaciones, torturas físicas y psicológicas cometidas en su persona por agentes del Estado a partir del 12 de septiembre de 1973 y hasta por dos meses aproximadamente.

17°) Que efectivamente, tal y como lo señala el demandado al contestar la demanda, se han efectuado por el Estado chileno distintos y variados esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentran en una situación como la de los demandantes, las que han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido objeto de tales hechos, ello no configura lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico, esta sentenciadora no considera acorde a la norma internacional mencionada que obliga al Estado chileno en virtud del artículo 5°



Foja: 1

inciso 2° de la Constitución Política de la República, por lo que se desestimaré la alegación de suficiencia de pago.

18°) Que, siendo un hecho indubitado la calidad de víctima invocada por el actor, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile.

19°) Que, a fin de acreditar el daño moral el actor acompaña, en lo pertinente al daño específico, copia de Informe Psicológico Evaluación de daños asociados a la violencia política, de don Pedro Nolasco Escobar Gutiérrez, elaborado por el Programa De Atención Y Reparación Integral En Salud y Derechos Humanos- PRAIS Ñuble, se aplica entrevista clínica concluyendo que la violencia ejercida por el Estado en contra de don Pedro Nolasco Escobar Gutiérrez existen secuelas psicológicas evidentes relacionadas al Trastorno por Estrés Post Traumático experimentado por el usuario, dando origen a patologías de la salud mental relacionadas directamente a los eventos traumáticos que experimentó en dictadura, en sus periodos de prisión política y posterior tortura tanto física como psicológica, en periodo de dictadura militar (1973-1990). Además de episodios asociados como la ansiedad y depresión en estado estacional.

20°) Que del mérito del instrumento privado antes detallado y no objetado en contrario esta Juez concluye que el actor naturalmente ha sufrido una aflicción en su psiquis producto de los tratos inhumanos a que fuera expuesto por agentes del Estado en múltiples ocasiones, el que debe conforme a criterios de justicia y equidad ser indemnizado, por tanto, se estima prudencialmente la indemnización del daño moral en la suma de \$30.000.000 en favor del actor.

21°) Que, en cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, atendida la naturaleza declarativa de la presente sentencia, las sumas ordenadas deberán enterarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, contabilizados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se efectúe el pago efectivo.



Foja: 1

22°) Que, no se condenará en costas al Fisco de Chile por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

23°) Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de prescripción y reparación integral;

II.- Que se acoge la demanda de autos respecto del daño moral sufrido, daño que esta sentenciadora estima prudencialmente en la suma de \$30.000.000.- a favor de don Pedro Nolasco Escobar Gutiérrez, más los intereses y reajustes consignados en el considerando vigésimo primero de este fallo;

III. Que, no se condena en costas a la parte demandada por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar.

CONSÚLTESE SI NO SE APELARE.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Dictada por doña Claudia Donoso Niemeyer, Juez Titular; autoriza don Erwin Emir Cárdenas Jofré, Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UVVXXTDVXUU

